



Administración pública e investigación científica ¿una intersección necesaria en América Latina hoy?

Public administration and scientific research: a necessary intersection in Latin America today?

Edgar Olivares Alvares

gariolivares2110@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-2042-4319>

**Universidad Pública de El Alto
El Alto, Bolivia**

Artículo recibido 12 de mayo de 2021 / Arbitrado 29 mayo de 2021 / Aceptado 19 agosto de 2021 / Publicado 01 de septiembre de 2021

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la administración pública en América Latina, ejerce sus funciones frente a un panorama cada vez más complicado, configurado por problemas históricos acumulados y otros inéditos que exigen respuestas urgentes en aras de fortalecer los sistemas democráticos y reducir las profundas disparidades que caracterizan desde hace tiempo a la región, tal como plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2024). Frente a este escenario la demanda de nuevos conocimientos y resultados, en base a la experticia y el análisis crítico e interpretación de datos, de información y de los procesos en marcha; emerge como premisa básica para resolver las problemáticas enfrentadas y adoptar soluciones efectivas.

Este problema, por su impacto global, resulta pertinente no sólo para los investigadores de una rama especial del conocimiento y las tecnologías de la disciplina administrativa –la teoría de la administración-, sino para un volumen de las ciencias y las tecnologías cada vez más amplio. Dada la trascendencia y resultados sociales, económicos y medioambientales esperados, de la administración pública, hacen que deje de ser objeto de estudio exclusivo de una ciencia particular para convertirse en objeto de la comunidad científica internacional y, específicamente para la de América Latina, en tanto dicha región está urgida a realizar profundas transformaciones estructurales para alcanzar el desarrollo.

En la actualidad, resulta ampliamente aceptado que, junto a otros factores: la ciencia, la tecnología y la innovación, son los ejes para avanzar en el bienestar de los países y sus sociedades, ya que generan desarrollo sustentable (Cobar, 2023). Sin embargo, no todas las ramas del saber tienen un proporcional nivel de desarrollo, en el contexto regional, la investigación en administración se considera incipiente y frágil, siendo identificado por Dávila (2005) como “un problema latinoamericano”.

Lo que pudiera suponerse una debilidad, también pudiera señalarse como una oportunidad para la participación y el involucramiento pleno de la comunidad científica a lo largo de todo el ciclo de mejoras en la gestión y los resultados de la administración pública mediante el uso de mecanismos inclusivos y participativos y el aprovechamiento de la capacidad instalada en el subcontinente.

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizan fuentes secundarias de información, es decir, se revisan y analizan artículos académicos, libros y tesis; consultadas tanto de bases de datos electrónicas, como de bibliotecas físicas. La investigación tiene carácter documental, con enfoque cualitativo e inductivo, por cuanto se estructura a partir de la recolección y aporte de los diferentes documentos que tributan al tema estudiado. Los autores persiguen argumentar la pertinencia de un mayor involucramiento de la investigación científica en la implementación de una administración pública latinoamericana adecuada y eficiente en los momentos actuales. Se concluye que la investigación científica desempeña un papel sustantivo en la gestión y el alcance de los resultados de la administración pública regional.

DESARROLLO

En la búsqueda realizada no se han encontrado estudios previos, producidos a nivel regional, que asuman de manera explícita el tema de la intersección entre la administración pública y la investigación científica; aunque sí hay un conocimiento científico acumulado alrededor de la administración pública desde diferentes ramas del saber. Para apreciar los alcances teóricos que sustentan la necesidad de un mayor acompañamiento científico en el accionar de la administración pública latinoamericana se parte de que la investigación es una actividad social que persigue el propósito de contribuir al campo de conocimientos del área que le es propia, es decir, examina y comprende una parte de la realidad como vía para contribuir a la solución de múltiples problemas sociales.

Desde la investigación científica mucho puede aportarse en la generación de nuevos conocimientos en administración, gestión y estrategia, gestión de las organizaciones y empresas, gestión humana y cultura organizacional, finanzas y marketing, Filosofía y Epistemología de la Administración, educación y formación empresarial, procesos de toma de decisiones, entre otros asuntos cardinales para la administración pública.

La investigación científica adquiere un valor determinado según el impacto de sus resultados, que se sustenta en el producto investigativo que aporta, el que puede trascender los límites temporales de su propia existencia y delinear otras esferas de la vida social, entre las que se encuentra la docencia -su campo más fértil- expresada en la formación de múltiples profesionales, con lo que transversaliza el acceso al conocimiento. Una de las áreas necesitadas del aporte científico, sus productos y resultados es la administración pública, para que se convierta cada vez más pensante, menos discursiva, más real dentro del juego de la realidad interpretada desde la investigación; es decir más efectiva.

Pero la aportación de la investigación científica al campo de la administración no resulta desde una ciencia independiente, sino que por el carácter transversal de los procesos que gestiona se reconozca el aporte de las ciencias sociales, tal como manifiesta Dávila (2005) la administración no hubiera podido

avanzar sin nutrirse de la teoría y la metodología de disciplinas como la economía, la psicología, la sociología, la ciencia política, la historia y la antropología; además de materias como las matemáticas aplicadas a la estadística.

Una de las contribuciones de la investigación científica, desde el punto de vista específico, al tema tratado en este trabajo se realiza desde la teoría de la administración. Acerca de la teoría latinoamericana de la administración Ballina-Ríos (2021) plantea que enfrenta una doble problemática: la epistemológica, por su falta de consistencia y coherencia interna, y la sociológica, debido a que su aparato conceptual está constituido de enfoques técnicos, ligados a procesos de producción a nivel mundial de corte pragmático-racionalistas; esta teoría administrativa, se fundamenta en el liberalismo económico, en modelos gerenciales provenientes en forma dominante de Europa y Estados Unidos, así como Japón.

Esta limitación el autor la propone superar con una descripción sintética del rumbo de las agendas alternativas de investigación en administración, mediante una conceptualización del papel que en las sociedades latinoamericanas juegan las empresas y las organizaciones. Sin embargo, la magnitud del problema señalado demanda despliegues epistémicos mucho más profundos e interseccionales, por lo que los resultados de esta investigación presentan un alcance limitado. El estudio del campo de la administración, a nivel regional, lo lidera Brasil con cuatro universidades ubicadas entre las siete que alcanzan mayor protagonismo en la intermediación como puede apreciarse en la Tabla 1.

Tabla 1.

Instituciones, en el campo de la administración, con mayor intermediación de América Latina, número de enlaces y nodos, y densidad de la red

# nodos	8478
# enlaces	32028
Densidad	0,001
Institución	Intermediación
Universidad de São Paulo	0,109619
Universidad de los Andes	0,04681
Universidade Federal do Rio Grande do Sul	0,033882
Universidad de Chile	0,026909
Universidad Federal de Santa Catarina	0,017577
Universidad Nacional de Colombia	0,016024
Universidad Federal de Rio de Janeiro	0,012823

Fuente: Cortés (2020, p. 16)

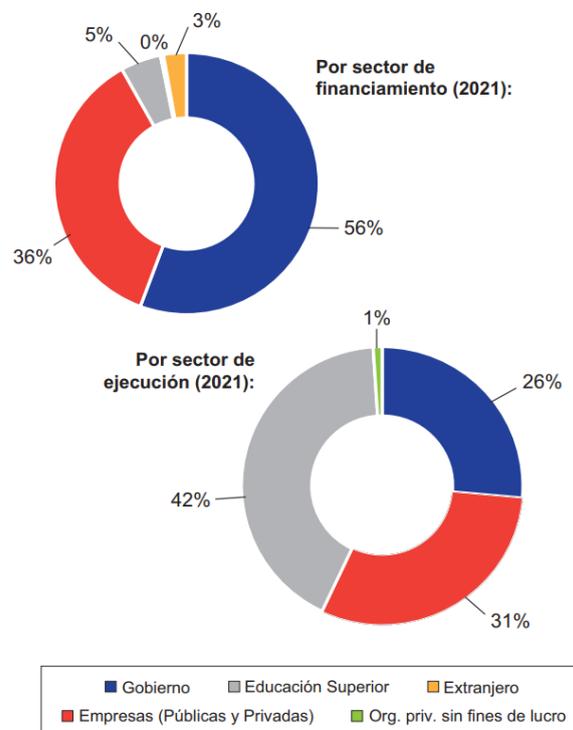
En el desarrollo de la investigación científica influyen, de una manera una otra, disímiles factores por ello hay que tener en cuenta el contexto económico, social, cultural en que ella se genera. En el caso específico de la región un análisis de la inversión en I+D y de los recursos humanos disponibles para la investigación, así como un recuento de las publicaciones científicas y de las patentes de invención de los países que la conforman denotan profundas asimetrías asociadas al potencial económico de cada país.

En el entorno latinoamericano el sector gobierno desempeña el papel protagónico en el financiamiento de la I+D, representando el 56% del total invertido; la participación de las empresas es

menor, siendo responsables del 36% del financiamiento, siendo esto una característica distintiva de dicha región con respecto a países más desarrollados, en los que la inversión del sector empresas supera a la del gobierno. En cuanto al sector de ejecución de los recursos, las instituciones de educación superior representan el 42%, el sector gobierno el 26% y las empresas el 31% (Ver Figura 1).

Gráfico 1.

Distribución sectorial de la inversión en I+D en América Latina y el Caribe

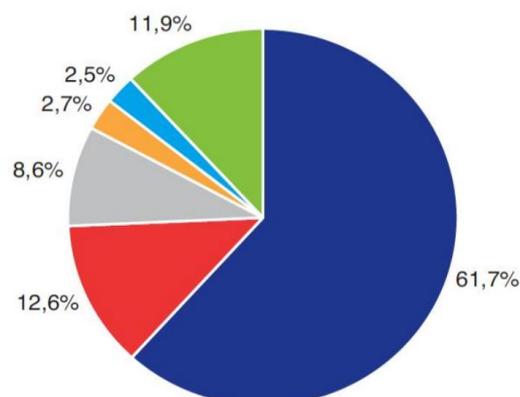


Fuente: Barrere et al. (2023, p. 16)

Debe señalarse, en este mismo sentido, que uno de los rasgos distintivos a nivel regional es la marcada concentración de la inversión en I+D en pocos países: sólo Brasil representa el 62% del esfuerzo regional, mientras que México un 13% y Argentina un 9%; Colombia y Chile, por su parte, representan el 3% (Ver Figura 2). Si bien esta concentración guarda cierta relación con la que se da al comparar el tamaño de sus economías, la brecha existente entre estos países y el resto de los latinoamericanos en materia de inversión en I+D resulta aún más significativa según Barrere et al. (2023).

Gráfico 2.

Distribución de la inversión en I+D en ALC en 2020 (dólares PPC)*



Fuente: Barrere et al. (2023, p. 18)

* Paridad de Poder de Compra (PPC) expresa los valores relativos a inversión en I+D, con el objetivo de evitar las distorsiones generadas por las diferencias del tipo de cambio en relación con el dólar. En la fuente original se tomaron los índices de conversión publicados por el Banco Mundial.

En el ámbito regional existe información sobre el personal, los recursos económicos y los resultados de la I+D en las universidades latinoamericanas; sin embargo, existe un vacío considerable de información comparable en un punto crítico: la vinculación de las universidades con su entorno socioeconómico. En una región caracterizada por el rol protagónico de estas instituciones en la producción de conocimiento, por un bajo dinamismo innovador de las empresas y por fuertes demandas sociales, medir la interacción de las universidades con la sociedad y el sector productivo es vital para aproximarse al impacto social de la ciencia y la tecnología según como plantean Albornoz, et al. (2017).

Hoy, la comunidad científica se proyecta internacionalmente, en la vida pública desde su posición profesional interviniendo en los debates de líneas presentes y futuras de solución a los problemas generados por el desarrollo; ella participa de forma directa en las múltiples políticas establecidas o en proyección. En este sentido, América Latina está abocada a la mejora en áreas como la participación ciudadana y de partes interesadas, las competencias clave de la gobernanza pública para impulsar un desarrollo sostenible y la integridad pública si quiere alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo (OCDE, 2024). Por ello resulta particularmente ineludible esclarecer qué papel desempeñará la comunidad científica en la búsqueda de innovaciones tecnológicas y respuestas puntuales para contribuir a elevar la eficiencia de la Administración pública dada las implicaciones que esta problemática trae consigo.

Asimismo, cabe señalar de acuerdo con Calderón y Castaño (2005), que la investigación científica adquiere su mayor sentido cuando se enmarca en una comunidad científica que acumula y estructura conocimientos a partir de los debates, las publicaciones y el juicio crítico entre pares. En el presente trabajo se asume, que la comunidad científica, en su sentido más amplio y asistémico implica “el conjunto del personal científico que interviene en la vida social en un contexto específico mediante la actividad profesional que denominamos ciencia (...)” (Delgado, 2000, p.8).

La comunidad científica entendida como grupo social socio profesional que tiende a formar determinadas organizaciones para su proyección social, tiene un interés especial en el contexto regional; en particular, en lo referido al alcance del pleno desarrollo de las personas y las sociedades. Esta comunidad interviene en la solución de las múltiples problemáticas, no sólo mediante innovación tecnológica sino en la formulación de las políticas públicas y sociales, entre las que se destacan su

influencia en el funcionamiento interno de las estructuras estatales ejecutivas y legislativas, así como la consulta en las distintas instancias del poder del Estado, su militancia política y en su radio de acción profesional específico.

Un indicador del estado de la investigación e innovación de una institución, un país o una región lo constituye la producción de artículos científicos. Al analizar las tendencias de producción de artículos científicos, tanto en el mundo como en América Latina y El Caribe, durante el período 2015 a 2021 a partir de los datos aportados por la Plataforma SCImago en su versión de 2022, Ramírez y Salcedo (2023), indican que Latinoamérica y el Caribe aportan menos del 4% del total mundial, no obstante, son sólo cinco los países de la región quienes aportan más del 85% de esos artículos. De acuerdo a estos resultados, se mantiene un desarrollo desigual y asimétrico de la investigación en el mundo y, particularmente, en Latinoamérica.

Según apuntan Barrere et al. (2023) la cantidad de investigadores en Equivalencia a Jornada Completa (EJC) en Iberoamérica ha experimentado un crecimiento del 45% entre 2012 y 2021, pasando de 436.521 a 634.421. Al examinar la distribución de los recursos humanos de acuerdo al sector donde desempeñan sus tareas, dichos autores, revelan que el sector de educación superior es el más significativo ya que en 2021 el 58% de los investigadores realizó sus actividades en el ámbito universitario, mientras que el 30% lo hizo en empresas (tanto públicas como privadas) y el 11% lo hicieron en instituciones de I+D pertenecientes al ámbito público.

La información sobre la cantidad de investigadores se encuentra expresada en EJC, una medida que facilita la comparación internacional ya que se trata de la suma de las dedicaciones parciales a la I+D que llevan a cabo los investigadores durante el año. Refiere así con mayor precisión al tiempo dedicado a la investigación y resulta de particular importancia en sistemas de ciencia y tecnología en los que el sector universitario tiene una presencia preponderante, como es el caso de los países de América Latina, donde los investigadores distribuyen su tiempo con otras actividades como la docencia o la transferencia.

En los últimos años, a través de los medios de comunicación masivos, se ha hecho palpable la consulta a diversas personalidades del área de la investigación científica, también se ha tornado frecuente la consulta del saber experto por entidades gubernamentales que, por su desempeño profesional, tienen que ver con el planteo y solución de problemas apremiantes, como el cambio climático y el alcance de una efectiva gobernanza pública. Por ello, en las páginas siguientes, se abordará cómo el escenario regional actual desdibuja la necesidad del acompañamiento científico al desempeño de la Administración pública.

Administración pública- investigación científica ante un escenario desafiante

La administración pública en América Latina ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, enfrentando crisis políticas, desigualdad social, y desafíos económicos. Sin embargo, a menudo estas administraciones se ven limitadas por la falta de información objetiva y analítica que podría guiar la toma de decisiones. Al mismo tiempo, la región se enfrenta a retos estructurales particulares, incluyendo sistemas de protección social frágiles, baja productividad y poca confianza en las instituciones públicas (OCDE, 2024).

Hoy, la administración pública, a nivel global, se enfrenta al denominado "océano de las

incertidumbres” o lo que algunos autores han llegado a denominar entornos VUCA, acrónimo en inglés de los calificativos volátil, incierto, complejo y ambiguo; sintetizando, en una palabra: incertidumbre, tal como plantean Catalá y Cortés (2020). La incertidumbre se traduce en que la única certeza es la falta de certezas proliferando un buen número de riesgos de diversa naturaleza que el World Economic Forum (2019) o Foro Económico Mundial, en español, sintetiza en cinco tipologías:

Riesgos económicos: crisis fiscales, burbujas financieras, fallos sistémicos en los mecanismos de gobernanza, comercio ilícito, desempleo, etc.

Riesgos medioambientales: desastres naturales, impactos del calentamiento global, daños provocados por el ser humano, desertización, crisis hídricas, etc.

Riesgos geopolíticos: ataques terroristas, Estados fallidos, conflictos de intereses, proliferación de armas de destrucción masiva, etc.

Riesgos sociales: crisis alimentarias, movimientos migratorios forzosos, expansión enfermedades contagiosas, etc.

Riesgos tecnológicos: ciberterrorismo, quiebras en sistemas críticos, ciberfraudes, robos de datos, etc.

En el escenario descrito la investigación científica mucho puede aportar a la administración pública, si se asume el criterio de Ballina-Ríos (2021) que la cultura de investigación es revalorada por la administración cuando surge la necesidad de entender no solo los aspectos formales de la productividad, sino también los aspectos simbólicos, cognitivos y culturales que permitan el diseño y la creación de nuevos modelos de organización más acordes con las exigencias del tercer milenio; realizar análisis interseccionales que superen la mera búsqueda por elevar la productividad y la calidad, que impliquen reformular los diferentes paradigmas organizacionales y que resultan ser, la mayoría de las veces homogeneizadores, universalistas y lineales.

En el manejo del complicado escenario al cual se enfrentan de manera cotidiana, las administraciones públicas en la región, no deben desestimar el vínculo ciencia- tecnologías de la información y el peso de esta interdependencia en el logro del desarrollo. En este sentido, Oliver-Espinoza y Gómez (2024) manifiestan que entre los países latinoamericanos para los que las actividades de investigación y desarrollo resulta un insumo importante (que son además las economías más grandes de la región), lo son en mucha menor proporción las tecnologías de la información, y viceversa. Aportan que los países que observan en las tecnologías de información un insumo importante, también desarrollan una creatividad online relevante.

Para la mejor conducción, gestión, manejo y efectividad en sus procesos, frente al escenario cada vez más retador, la Administración pública regional necesita y necesitará, cada vez con mayor grado, de la ciencia, la tecnología y la innovación que son precisamente las áreas bajo las que se han desarrollado los procesos de transformación social y cultural en este siglo XXI. Sin embargo, Latinoamérica sigue muy por detrás en la inversión y proyección de actividades científicas y tecnológicas en relación con países como Israel, Corea, Estados Unidos, Japón, Alemania y Finlandia; como ya señalamos anteriormente, durante el 2023 Brasil es el único país latinoamericano cuya

inversión representa más del 1% de su PBI seguida de Argentina que invirtió 0,52% mientras que el resto de los países invierte menos del 0,50% de su producto en I+D de acuerdo con Barrere et al. (2023).

Se advierten varias barreras para un mayor acompañamiento científico a la Administración pública, por ejemplo Calderón y Castaño (2005) plantean que por diversas causas, la investigación no ha sido tradicionalmente una fortaleza de la disciplina administrativa; entre otras, identifican a la orientación excesivamente práctica que ha llevado a que muchos esfuerzos se centren en aspectos instrumentalistas descuidando su desarrollo teórico; el nivel incipiente de una epistemología de la administración que no ha permitido alcanzar consensos en la comunidad científica sobre su objeto de estudio; los cuestionamientos que se hacen a la manera como se ha construido gran parte del conocimiento administrativo y algún predominio ideológico sobre lo científico en la acción administrativa.

Los cuatro párrafos, anteriormente expuestos, sugieren que a pesar de los beneficios potenciales existen determinados factores que obstaculizan, de manera significativa, la colaboración entre la ciencia y la administración pública en América Latina. Entre dichos factores pueden señalarse:

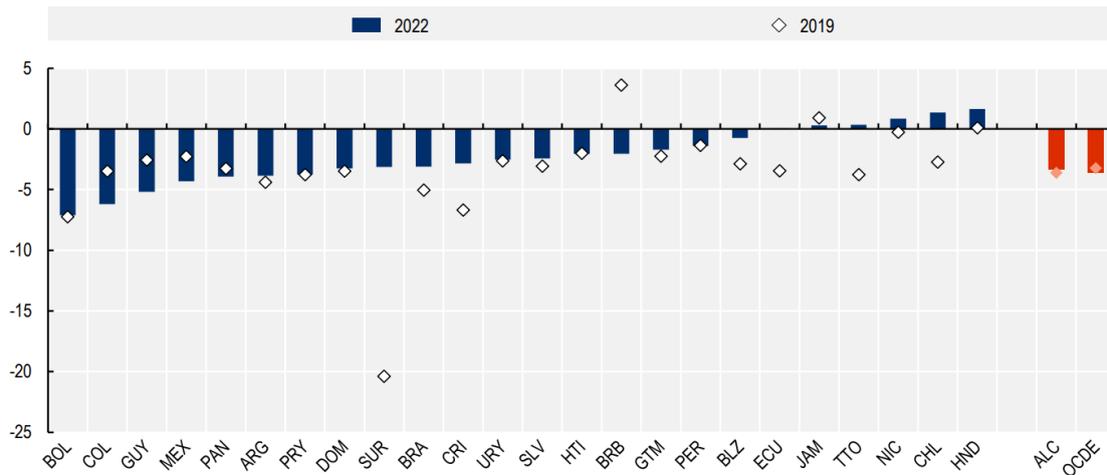
La desconfianza mutua: inmersos en su labor cotidiana y en las tensiones del entorno los funcionarios públicos pueden ver a los científicos como ajenos a la realidad práctica de la gobernanza, mientras que los académicos pueden considerar que los políticos no están suficientemente interesados en la evidencia o el saber experto.

Falta de recursos: las limitaciones presupuestarias en muchos países de la región afectan tanto a la administración pública como a las instituciones académicas, debe tenerse en cuenta que para el desarrollo de la investigación científica hacen falta recursos materiales y de infraestructura, financieros y humanos; lo que dificulta la colaboración en proyectos que requieran inversión y tiempo. Ya anteriormente, en el presente trabajo, se ha tratado el estado de la inversión del PBI a nivel regional en I+D.

La capacidad de los gobiernos latinoamericanos para destinar financiamiento en la adquisición y desarrollo de los recursos puede asumirse, en buena medida, a partir del balance fiscal que resulta de la diferencia entre los ingresos y los gastos, e indica si las cuentas públicas están equilibradas o si hay superávit o déficit. En este sentido, cabe señalar que, en el 2022, el balance fiscal promedio de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe ascendió a -3.4% del producto interno bruto (PIB), donde sólo seis de los 24 países registraron superávit, siendo los mayores los de Honduras (1.6%), Chile (1.4%) y Nicaragua (0.8%) (Ver Gráfico 1).

Gráfico 3.

Balance fiscal de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2019 y 2022. América Latina y el Caribe respecto a OCDE



Fuente: OCDE (2024, p. 151)

Capacitación y formación: existe una necesidad urgente de formar a los gerentes y funcionarios públicos en el uso y la interpretación de datos científicos; lo que incluye no sólo la técnica de análisis, sino también la comprensión de cómo traducir hallazgos científicos en políticas efectivas. Por ello debe elevarse la profesionalización y capacitación del personal de la administración pública en la región, tal como afirman Pérez y Flores (2022). De ahí la demanda de incrementar la inversión en la formación y desarrollo de habilidades, valores y competencias del personal público para mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la gobernanza regional.

Por el nivel de desarrollo alcanzado, a nivel regional, la inversión en investigación científica y tecnología debe privilegiar las esferas donde existen ventajas comparativas, a fin de conservarlas, y otras en que dichas ventajas se pueden adquirir, con inclusión de la agricultura, minería, energía solar, biocombustibles, biotecnología, comunicaciones, computación y nanotecnología; proceso donde la administración pública desempeña un rol determinante en tanto requiere de la colaboración de las empresas y otras alianzas entre el sector público y el privado.

En este sentido, la expansión de las manufacturas y servicios requiere la definición de los mercados y el diseño de productos y tecnologías, lo que entraña un esfuerzo más complejo que en el pasado. Ante este escenario tiene razón Bitar (2014) cuando puntualiza que los avances esperados no acontecerán sin un papel más activo del Estado en lo que se refiere a coordinar la acción pública con las empresas, centros de investigación y formación de expertos que apunten a crear nuevas esferas de especialización y elevar la competitividad.

Hoy, los innumerables riesgos, tensiones y desafíos que delinean el entorno operativo de la Administración pública acentúan la certeza de que los alcances de la investigación científica pueden dinamizar los resultados del sector público; para continuar dando cumplimiento al objetivo del presente artículo este asunto se trata en mayor amplitud en las páginas que siguen.

Evidencia científica: importancia para la administración pública regional

Dos factores, interrelacionados, identifican la situación regional actual: la complicada situación socioeconómica y la demanda de un nuevo modelo de desarrollo económico y social: justo, equitativo y sostenible (OCDE, 2024); a partir de ellos se concibe el papel de la comunidad científica atendiendo

a: 1) los problemas directamente ligados a la problemática técnica y tecnológica, es decir, a la necesidad de conocimientos; 2) el nivel de desarrollo alcanzado por la región y su entrada en una transición demográfica inédita con implicaciones que demanda un enfoque novedoso de desarrollo enfocado en las personas y su entorno; 3) las soluciones económicas, sociales, culturales, sanitarias, medioambientales y políticas, posibilitan la aparición de sectores económicos emergentes y nuevos portadores de una nueva racionalidad, lo que configura el establecimiento de nuevas relaciones intergeneracionales no solo por su contenido sino también por sus formas.

La comunidad científica está llamada a desempeñar un papel sustantivo en el acompañamiento a la administración pública en el alcance de sus objetivos por:

1.- Sus conocimientos y potencialidad técnica. Es de conocimiento general y reconocimiento público que las dimensiones de la Administración pública requieren conocimientos científicos para encontrar vías de solución efectivas a largo plazo. Los científicos portan conocimientos técnicos e influyen en la innovación tecnológica, sin ellos resulta imposible lograr las soluciones proyectadas en tanto proporcionan, a los funcionarios públicos, datos sólidos para fundamentar sus decisiones. Es decir, determinan en la toma de decisiones informada, especialmente crucial en sectores como la salud, la educación y el desarrollo económico, donde las políticas deben basarse en evidencias claras para ser efectivas.

2.- La dimensión actual de las soluciones globales al problema. La magnitud del alcance del desarrollo y las propuestas de solución actuales, han desplazado el punto crítico de la esfera científica especial, a la de la política, dado que la solución de sus efectos para la adopción de modelos de desarrollo distintos y opuestos a los que la ciencia reclama, pero que sólo desde la política pueden ponerse en práctica; por ello los científicos tienen que utilizarse más por los decisores públicos, por ser sujetos esenciales en la formulación de las políticas.

3.- La significación cultural de prestigio de la comunidad científica como tal. Asimismo, la comunidad científica en general, aun tomada en el sentido más amplio y amorfo, disfruta en el contexto latinoamericano de un elevado reconocimiento y situación privilegiada en cuanto a ascendencia en el medio cultural.

4.- La existencia de vías estatales y no estatales para acceder a la formulación de las políticas de este grupo. La comunidad científica, entendida como grupo socioprofesional, está en condiciones de funcionar como un sujeto múltiple que puede canalizar la solución de esta problemática desde diferentes instancias y visiones; ya sea aportando soluciones técnicas o conformando, desde distintas organizaciones, un abanico temático capaz de contar con la diversidad social al enfoque del ejercicio de la administración pública, siempre desde una óptica profesional y tecnológica.

Asimismo, las ciencias sociales y económicas ofrecen metodologías robustas para evaluar y analizar políticas públicas, lo que permite a los gobiernos identificar la efectividad de las iniciativas, lo que permite tomar decisiones retroactivas y correctivas, facilitando ajustes y mejoras en tiempo real. La evidencia científica resulta fuente de innovación, adaptación y transformación en la administración pública. La implementación de tecnologías emergentes, como el análisis de big data o la inteligencia artificial, optimiza procesos y mejora la eficiencia del sector público.

En este contexto, el acompañamiento científico, puede permitir a los servidores públicos ofrecer

servicios más optimizados, profesionales y personalizados, así como lograr una mayor seguridad en el ámbito digital. Máxime que la ciberseguridad se configura en un área de desarrollo paralela a los procesos de transformación digital de la administración Pública, quien podrá entonces invertir de forma permanente en la protección de sus sistemas y desarrollar análisis efectivos de riesgos.

Además, el saber experto fomenta la comprensión nacional e internacional de las consecuencias económicas, sociales, éticas, medioambientales y culturales que el bajo rendimiento de la administración pública tiene en el proceso de desarrollo. También puede proponer y estimular políticas y programas orientados a la acción y destinados a garantizar la seguridad social y económica a las personas más vulnerables, así como darles oportunidades de contribuir al desarrollo y compartir sus beneficios con lo que la gestión pública se fortalece.

En este orden, la evidencia científica, puede presentar alternativas y opciones de política que sean compatibles con los valores y metas nacionales y con los principios reconocidos internacionalmente con respecto al accionar de la administración pública y a las necesidades de las personas. Así como puede alentar el desarrollo de una enseñanza, una capacitación y una investigación que respondan adecuadamente al intercambio internacional de aptitudes y conocimiento en esta esfera.

Mediante la evidencia científica puede avanzarse hacia una necesaria simplificación administrativa y legal, una reingeniería de procesos acompañada de un uso intensivo de las TICs para facilitar, simplificar y reducir la burocracia. Resulta necesario insistir en un factor apuntado por Lee et al. (2021) cuando señalan que la literatura ha relacionado el crecimiento y el nivel de desarrollo de las economías con su actividad de innovación, sin el soporte científico procede impensable lo anteriormente apuntado, máxime para una Administración pública innovadora como la que se demanda en los momentos actuales.

La administración pública deviene pieza clave en una sociedad avanzada, pues le ha encomendado la satisfacción de muchas de sus necesidades y expectativas mediante una serie de políticas públicas encaminadas a lograr la cohesión e integración social y una democracia de alta calidad. Una gestión pública moderna, ágil, eficiente y acertada es determinante para lograr una sociedad con mayores cotas de bienestar y de calidad de vida. La administración pública debe asumir un papel de liderazgo respecto a la innovación, a través de la mejora de los servicios públicos, la orientación a la ciudadanía y a las empresas y la eficiencia operativa. En este sentido, la innovación pública debe entenderse como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social.

Es por ello que la innovación en este sector, ya sea en términos de cómo los servicios públicos deben ser entregados, o en la creación de infraestructura social que puede utilizarse de forma novedosa, toma tiempo ya que son cambios en los procesos, impactos y resultados, tal como plantea Borins (2012) necesita un basamento científico.

El mismo Borins (2002) visibiliza tres tipos de innovaciones en el sector público. El primer tipo es el de "abajo hacia arriba" que se traduce cuando alguien tiene una buena idea y la coloca en el buzón de sugerencias, dándole seguimiento la organización ejecutora a través de sus canales normales. El segundo tipo de innovación se relaciona con las repuestas a las crisis, ya que no son más que resultados

de factores que son impredecibles o externos. Por último, la innovación vinculada con las reestructuraciones organizativas dirigidas por jefes de agencias. En este sentido, la reestructuración es una respuesta a la organización del sector público que simplemente no está cumpliendo con las expectativas normales.

En este mismo sentido, Parada et al. (2017), sostienen que la innovación social es –sin duda– un tema global, que se gesta a partir de la aceleración de las crisis mundiales, el aumento de las desigualdades, el calentamiento global, la diversidad cultural y el surgimiento de nuevas enfermedades, entre otros factores. En el caso de los países latinoamericanos, precisan, se encuentran viviendo un momento determinante en términos de innovación social: las grandes organizaciones han asumido procesos de transformación que surgen desde iniciativas de producción, con productos de menor demanda de insumos y menor consumo de energía en sus ciclos de vida, asunto que exige respuestas puntuales de la gestión pública.

En este contexto las administraciones públicas en Latinoamérica pueden mediar en la promoción de la creación de convenios interinstitucionales, mediante el establecimiento de pactos, contratos y acuerdos entre universidades, centros de investigación y gobiernos locales para facilitar el intercambio y flujo de conocimientos, valores y recursos. Por su parte, la ciencia instrumentada desde la docencia, puede ofrecer a la administración pública programas de capacitación pertinentes, implementar diferentes vías y módulos de formación para servidores públicos enfocados en la importancia de la evidencia en la toma de decisiones y en el uso de herramientas metodológicas e instrumentales.

El saber científico puede contribuir al incremento de la visión y las opciones estratégicas en las administraciones públicas, al orientarlas respecto a objetivos claros, consensuados y compartidos con toda la organización y la sociedad a la que se dirige el servicio público. La comunidad científica resulta vital para transitar hacia una gobernanza anticipatoria, al ofrecer análisis de prospectiva desde el sector público que le permita predecir y para anticiparse, en la medida de lo posible, a los desafíos, sucesos y escenarios, de modo que le permita, al sector público, alcanzar la capacidad de reaccionar ágilmente y de manera efectiva ante eventos coyunturales, crisis complejas y marcos de emergencia.

La investigación científica resulta un actor singular para que la administración pública regional pueda invertir y obtener resultados esperados en la formación para mejorar la capacitación de la ciudadanía en torno a las tecnologías digitales disruptivas que se imponen con una velocidad insospechada, entre las que se encuentran: los grandes datos y la inteligencia artificial, como modo que propicia la adaptación a los cambios y una mejor empleabilidad.

Desde el saber científico puede fomentarse la investigación aplicada mediante la creación de incentivos a los académicos a trabajar en problemas concretos de la administración pública, promoviendo así un enfoque más pragmático y orientado a resultados; en tanto la reintroducción de la cuestión del desarrollo en la agenda pública y en el pensamiento económico, social y político de la región muestra, como sostiene Schweinheim (2011), distintas dimensiones.

La tercera dimensión que es necesario considerar, como apunta O'Donnell (2002) se refiere a la nueva matriz del Estado y la administración pública para unas políticas públicas orientadas al desarrollo. Se trata no sólo de la participación de los servicios estatales en el producto bruto o de las inversiones estatales de todo tipo para promover el crecimiento, la igualdad y la ciudadanía sino, además, de

proyectar la configuración del Estado como un conjunto de relaciones de dominación que suponen una determinada alianza de clases para el desarrollo.

Además, de una configuración de la administración pública en sus aspectos institucionales, organizacionales, de sistemas y procesos, de dotación de servidores públicos y de tecnologías de gestión, que sea funcional a una visión nacional del crecimiento, la igualdad y la ciudadanía, a una matriz de políticas estatales para el desarrollo y a un Estado que sea expresión de una alianza de clases que sostenga dicha visión nacional; por lo que la comunidad científica prefigura un aliado potencial en el camino de los servicios públicos efectivos, innovadores y de elevada calidad.

CONCLUSIONES

La administración pública en América Latina tiene el potencial de beneficiarse enormemente de un mayor acompañamiento de la investigación científica. La integración de la evidencia científica puede potenciar la efectividad de las políticas públicas y contribuir a una gobernanza más eficiente y transparente. Sin embargo, esto requiere un compromiso mutuo y un entorno facilitador que derribe las barreras actuales. En este contexto, el futuro de la administración pública en la región podría transformarse radicalmente, alineándose con las necesidades y expectativas de sus ciudadanos; el escenario desafiante motiva una actuación orientada al fomento de un diálogo constructivo entre ciencia y política, entre comunidad científica y administración pública.

A pesar de sus notables limitaciones la comunidad científica latinoamericana, en su conjunto, desempeña, y cada vez más lo hará en mayor medida, un papel sustantivo en la formulación de las políticas científicas, tecnológicas, públicas y sociales para conducir de forma efectiva la gestión pública. Dicha comunidad mediante sus organizaciones, como parte de la sociedad civil, puede constituirse en uno de los factores condicionantes de una solución socialmente viable a la problemática del desarrollo justo, equitativo y sostenible al cual están avocadas todas las naciones del ámbito regional.

El papel de la comunidad científica es superior a su capacidad estrictamente técnica, por su potencialidad, como parte de la sociedad civil, y como grupo social interesado en promover un modo nuevo de plantear las relaciones interinstitucionales y personales, la gestión pública y la gobernanza, de conducir inéditos procesos sociales a favor de la inteligencia colectiva para transformar la cultura organizativa y generar nuevo conocimiento, fomentando la colaboración, la toma de decisiones grupales y la búsqueda de consensos en torno a la construcción de modelos anticipatorios, innovadores, inclusivos y estratégicos en las administraciones públicas, distintos a los modelos tradicionales desde donde se proyecta el “desarrollo” pero que continua siendo una quimera, hasta lo transitado de este siglo XXI, en el espacio latinoamericano.

REFERENCIAS

- Ballina-Ríos, F. (2021). ¿Hacia una teoría de la administración en América Latina? *Ensayos de Economía*, 31(58), 86-108. <https://doi.org/10.15446/ede.v31n58.85905>
- Barrere, R., Anlló, G., Trama, L., Crespo, M., Rivas, A., Lamm, E., González, N., Urich, A. F., Matas, L., Sokil,

- J. (2023). *EL ESTADO DE LA CIENCIA Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/Interamericanos 2023*. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)-UNESCO: Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe.
- Bitar, S. (2014). *Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina*. CEPAL-Impreso en Naciones Unidas, LC/L.3681 LC/IP/L.328. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/0bca7d54-5945-4014-85f8-7f24fc312805/content>
- Borins, S. (2012). *Innovation in Business and Government: Looking Forward*. Australian National University.
- Borins, S. (2002). Leadership and Innovation in the Public Sector. *Leadership & Organization Development Journal*, 23(8), 467-476.
- Calderón, G. y Castaño, G. A. (2005). Introducción. En G. Calderón y G. A. Castaño (Coords.). *Investigación en administración en América Latina: evolución y resultados* (pp. 7-12). Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
- Catalá, R. y Cortés, O. (2020). *Administración 2030: Una visión transformadora. Propuestas para la próxima década*. Observatorio para la Transformación del Sector Público ESADE-PwC.
- Cobar, O. (2023). Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe 2023. https://www.academia.edu/112569536/Ciencia_y_Tecnolog%C3%ADa_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_2023
- Cortés, J. D. (2020). *Atlas de la investigación en administración en América Latina Vol. 4. Documento de investigación No. 158*. Editorial Universidad del Rosario.
- Dávila, C. (2005). Generación de conocimiento administrativo en América Latina: ¿realidad, necesidad o utopía? En G. Calderón y G. A. Castaño (Coords.). *Investigación en administración en América Latina: evolución y resultados* (pp. 39- 43). Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
- Delgado, C. J. (2000). El papel de la comunidad científica en la formación de la política pública de medio ambiente en Cuba. En C. J. Delgado, J. Rosales, T. Fung, H. A. Arias, J. E. Tapia. *Democracia, derecho y sociedad civil* (pp. 1-26). Editorial de Ciencias Sociales.
- Lee, K., Lee, J. y Lee, J. (2021). Variety of national innovation systems (NIS) and alternative pathways to growth beyond the middle-income stage: Balanced, imbalanced, catching-up, and trapped NIS. *World Development* (144). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105472>
- OCDE (2024). *Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0f191dcb-es>
- O' Donnell, G. (2002). *Acerca del Estado en América Latina contemporánea: diez tesis para discusión*. Universidad de Notre Dame.
- Oliver- Espinoza, R. y Gómez, H. (2024). Innovación en América Latina: caracterización a partir del índice de innovación global. *Universidad y Sociedad*, 16(2), 52-64.
- Parada, J. G., Ganga, F. A. y Rivera, Y. Y. (2017). Estado del arte de la innovación social: una mirada a la

perspectiva de Europa y Latinoamérica. *Opción*, 33(82), 563-587.

Pérez, S y Flores, E. (2022). Gestión de recursos humanos en el sector público de América latina, 2017-2021: revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(2): 3968. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.2141

Ramírez y Salcedo (2023). América Latina y la Producción de Artículos Científicos: un crecimiento desigual y asimétrico. *Revista Práxis Educativa*, 19(50): e12001. <https://doi.org/10.22481/praxisedu.vXXiXX.XXXX>

Schweinheim, F. F. (2011) ¿Un nuevo desarrollo en América Latina? Implicancias en las políticas públicas, el Estado y la Administración. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (4), 57-98.

World Economic Forum. (2019). Global Risks Report 2019. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf